

institución y contexto de origen (Kirkeboen et al., 2016; Hastings et al., 2013; Rodríguez et al., 2016; Chetty et al., 2020; Mountjoy, 2026).

El estudio del CEP es consistente con esta evidencia y muestra que una fracción relevante de egresados de la educación superior termina en ocupaciones por debajo de su calificación formal, con castigos salariales significativos. Además, evidencia reciente muestra que una fracción importante de trabajadores termina desempeñándose en empleos para los que no fue entrenada, experimentando también castigos salariales (Eckardt, 2026).

Andrés Barrios, /economista experto en educación y director del Human Development Lab de la Uandes

Acceso a medicamentos: un círculo que Chile no logra cerrar

Señora Directora:

Cada cierto tiempo, un tema tan esencial como es el acceso a los medicamentos vuelve a la discusión pública como si fuera una novedad, olvidando que aún no lo resolvemos integralmente.

En Chile, el gasto total en salud, compuesto por el gasto público (vía impuestos y cotizaciones obligatorias) más el gasto de bolsillo (que es lo que directamente deben pagar

las personas al enfermarse) ha crecido sostenidamente, desde un 4% del PIB en 1990 a cerca de un 10% en la actualidad -similar al promedio OCDE-, y en el mismo período el gasto público ha aumentado de 1,9% a cerca de 6% del PIB, constituyéndose en una anomalía inédita que merece explicación, ya que a diferencia de la experiencia internacional, donde el aumento del gasto público produce disminución de costos para el bolsillo familiar, en nuestro país se ha mantenido porfiadamente sobre el 30%, y de este más de un tercio corresponde a lo que las personas gastan en medicamentos.

Parte de la respuesta está en el acelerado envejecimiento de la población, sin que el país haya realizado las inversiones necesarias en prevención ni adaptado su sistema de salud a las enfermedades crónicas que dominan el perfil epidemiológico actual. A ello se suman las ineficiencias del sector público, cuya productividad no despega pese a sostenidos aumentos de recursos; y las del sector privado, donde los incentivos apuntan en la dirección contraria a mantener a la población saludable y a contener el gasto: más prestaciones, más consumo, más costos.

Oswaldo Artaza / Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas